

La deuda climática que Chile está empezando a pagar



Carlos Esse
Director Inst. Iberoamericano
de Desarrollo Sostenible
Universidad Autónoma de Chile

La reciente investigación de la Universidad de Stanford, publicada en la revista Nature, propone una analogía tan brutal como clarificadora: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son, en esencia, basura. Al igual que los residuos sólidos que terminan en vertederos, el CO₂ es un subproducto de la actividad humana que genera daños cuantificables. La diferencia es que este residuo es invisible: se acumula en la atmósfera y genera una “deuda con intereses” que ya no es una amenaza futura, sino una crisis de flujo de caja presente a escala mundial.

Este estudio rompe la abstracción del cambio climático al ponerle cifras concretas y alarmanes. Una tonelada de CO₂ emitida en 1990 ya ha causado daños por US\$180, pero esa misma unidad generará un perjuicio cercano a los US\$1.840 hacia el año 2100. El daño se multiplica por diez. En Chile, esto no es teoría económica; es la traducción financiera de nuestra realidad cotidiana. La megasequía que golpea a la zona central por más de una década, la ferocidad de los incendios forestales y las lluvias torrenciales concentradas en pocos días son los avisos de cobranza de esa deuda acumulada.

Chile aporta solo el 0,25% de las emisiones globales, pero es uno de los países más vulnerables al cambio climático según Naciones Unidas. Su geografía lo expone a marejadas, sequías, fragilidad en ecosistemas de montaña y dependencia de recursos naturales. El desarrollo industrial mundial afecta al país con menor seguridad hídrica, aumento de precios alimentarios y daños frecuentes a infraestructura fundamental.

El marco de Stanford plantea que el problema ambiental es una externalidad económica ignorada: los grandes emisores obtienen beneficios privados inmediatos mientras trasladan costos como limpieza y salud pública a la sociedad. En Chile, el “impuesto verde” es de apenas US\$5 por tonelada de CO₂, muy lejos de los US\$100 estimados internacionalmente como costo social real.

Cerrar esa brecha no es solo una bandera ambientalista, sino una estrategia de supervivencia económica. Un precio adecuado al carbono incentiva la innovación y acelera la transición energética, un área donde Chile ya es referente gracias a su potencial solar y eólico. Sin embargo, incluso si el mundo lograra la ambiciosa meta de limitar el calentamiento a 2°C, la ciencia advierte que los eventos extremos serán la nueva norma.

La adaptación debe dejar de ser el pariente pobre de la mitigación. Esto implica rediseñar nuestras ciudades para que sean capaces de absorber lluvias intensas, proteger las cuencas que nos dan de beber y planificar seriamente el desplazamiento de la frontera agrícola. La lección es directa: cada tonelada emitida hoy es un interés que las próximas generaciones pagarán mucho más caro. El tiempo de esconder la basura bajo la alfombra terminó; hoy la cuenta está llegando, y Chile debe decidir si la paga con innovación o con decadencia.